

Valparaíso, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

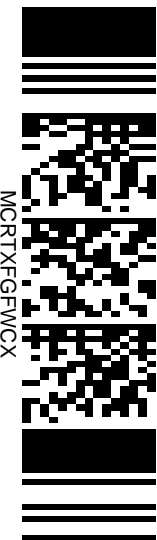
Que, comparece la abogada, doña NERI ELIZABETH CUIZA URRIOLO, en representación del demandante don Helio Farías Pasten, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha trece de febrero del 2023, dictada por la Jueza titular del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, doña PATRICIA ZAVALA ASTUDILLO, en los autos RIT T-29-2022, ROL I. Corte de Apelaciones de Valparaíso N° 218 - 2023, que rechazó la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales deducida en lo principal y la acción subsidiaria por despido injustificado, interpuesta en contra del ex empleador Besalco Maquinarias S.A..

La recurrente interpone el recurso de nulidad por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse infringido tanto en la tramitación del procedimiento como en la dictación de la sentencia Garantías Constitucionales, al vulnerarse la Garantía del Debido Proceso al aceptarse la incorporación de prueba ilícita, la que además fue apreciada y ponderada en la sentencia definitiva, provocando un procedimiento como una sentencia viciada, solicitando se proceda a invalidar parcialmente el procedimiento, retrotrayéndolo hasta la celebración de la audiencia preparatoria ordenando la continuación del mismo por juez no inhabilitado. En el acápite de fundamentación de la causal señala que en este caso infringió substancialmente garantías constitucionales, como es la garantía del debido proceso, el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones

En la audiencia de vista de la causa, finalizada las exposiciones de las partes se puso término al debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo y producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.

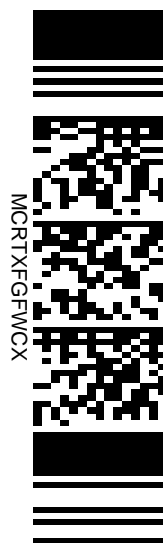
CONSIDERANDO:

Primero: Que, la recurrente interpone recurso de nulidad contra el fallo dictado por el juez de la instancia fundado en la causal del artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo, en su primera hipótesis, que dispone “Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales...”. La recurrente señala que, en este caso, tanto en la tramitación de la causa como en la sentencia, se habría vulnerado la Garantía del Debido Proceso, contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado, en particular lo dispuesto en su inciso 5° que dispone que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos...”. Agrega que la Garantía del Debido Proceso contempla varios elementos, y que de la norma



transcrita se desprende que toda sentencia debe basarse en un proceso previo “legalmente tramitado” y que le corresponde al legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo, señalando que en el caso de autos se puede apreciar que el procedimiento no fue legalmente tramitado al admitir y ponderarse prueba ilícita por parte de la jueza del grado.

Segundo: Que, en el considerando primero de la sentencia recurrida se consigna que comparece don Helio Andrés Farías Pasten, deduciendo denuncia de despido vulneratorio de derechos fundamentales y cobro de indemnizaciones y prestaciones, en contra de su ex empleador Besalco Maquinarias S.A., solicitando se declare que su despido fue vulneratorio de sus derechos fundamentales y condenando al pago de las indemnizaciones y prestaciones demandadas. Funda su denuncia, señalando que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 1 de agosto del año 2021, como encargado de Jefe de Turno en la Faena Tranque El Mauro ubicado en el sector de Caimanes, de la comuna de Los Vilos; detallando su jornada de trabajo, sistema y monto de remuneraciones. Sostiene, que durante la relación laboral hubo problemas con un trabajador, don Luis Adalberto Faúndez Jiménez, quien habría provocado problemas con el cumplimiento de las instrucciones, por lo que solicitó su salida, siendo este despedido con fecha 28 de abril de 2022, invocándosele como causal de término del contrato la establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, de necesidades de la empresa. Señala el denunciante que con posterioridad, dicho trabajador demanda a la empleadora por despido vulneratorio por habersele vulnerado el derecho a la libertad de opinión del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, lo que dio origen a la causa RIT T- 1076-2022 del 2° Juzgado del Trabajo de Santiago. En dicha causa, don Luis Faúndez, a través de su abogado, en la minuta de prueba de su parte, en el punto II otros medios prueba, el trabajador ofrece acompañar dos grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas con él, cuyo origen y contenido desconoce, ya que si bien sostuvo conversaciones telefónicas en más de alguna ocasión con don Luis Faúndez, éstas siempre fueron de carácter privado y jamás se le informó respecto de que se le estuviera grabando, ni mucho menos dio autorización y consentimiento para ello. Señala que con fecha 24 de agosto de 2022, Besalco Maquinarias S.A., le despide por las causales del artículo 160 N° 1 letra a), esto es: "Falta de Probidad en el ejercicio de mis funciones" y N° 7: "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", para ello cita las supuestas grabaciones telefónicas realizadas por don Luis Faúndez a su persona. Con respecto a la desvinculación, señala que se basó en unos audios ofrecidos por un ex trabajador dentro de una minuta de prueba, que no tiene acceso a tales audios, con la finalidad de corroborar el contenido y fidelidad de los mismos, desconociendo si efectivamente corresponden a una grabación de una conversación privada sostenida por él y el otro ex trabajador. Señala que esta prueba jamás llegó a rendirse en la causa, y no se pudo calificar la legalidad de la prueba en dicha sede, pues las partes llegaron a acuerdo. Agrega que la denunciada procedió a despedirle en represalia por lo supuestamente



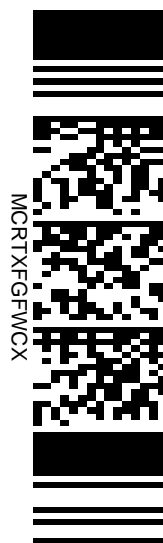
sostenido en dichas conversaciones telefónicas, las que desconoce y en caso de corresponder efectivamente a una grabación de una conversación telefónica suya, esta grabación y difusión de la misma además de vulnerar gravemente sus garantías fundamentales, también configuraría el delito previsto y contemplado en el artículo 161 A del Código Penal. Concluye que es un despido vulneratorio por ser una represalia de la empleadora frente por unas grabaciones de conversaciones telefónicas en las que habría participado y que fueron ofrecidas como prueba en un juicio laboral en contra de la misma Empresa y porque el hecho de invocar contenido de conversaciones telefónicas como fundamento para despedirle, implica una vulneración a las garantías constitucionales contemplada en el artículo 19 N° 4 y 5 de nuestra Constitución Política, es decir una violación a su vida privada y a sus comunicaciones. En subsidio, interpone demanda de despido injustificado, cobro de prestaciones e indemnizaciones, fundando en que el despido se basa en las conversaciones telefónicas a las que se refirió y no resulta posible que haya faltado a la probidad en el desempeño de sus funciones por dichas conversaciones, en cuanto las grabaciones presentadas en un juicio en contra de la demandada por don Luis Faúndez, datan de fecha 2 de mayo de 2022, y dicho trabajador fue despedido por la demandada con fecha 28 de abril de 2022, como tampoco pudo faltar a la confianza adelantando la noticia del despido, como sostiene la demandada en la carta de término, pues este ya se había verificado. Tampoco existe ningún antecedente que permita corroborar las faltas que se imputan, como que el ex trabajador haya presentado una licencia médica cuando ya se encontraba despedido o que él le haya filtrado información confidencial.

En el considerando segundo de la sentencia se consigna que la parte demandada Besalco Maquinarias S.A., contestando la demanda, opone excepción de finiquito de las acciones deducidas, y en cuanto al fondo señala que la demanda no se refiere a la veracidad de las acusaciones realizadas por la empresa, sino que indica que no serían suficientes para justificar el despido, por lo que confirma que realizó la conversación con el sr. Faúndez en los términos señalados en el audio, por lo demás los fundamentos señalados por el actor respecto a la falta justificación del despido son derechamente falsos, ya que el despido sí fue plenamente justificado. En lo relacionado niega la demandada que se hayan vulnerado la garantía de indemnidad del demandante y que se hayan vulnerado los derechos fundamentales del trabajador, en especial la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y de su vida privada, con ocasión del despido; y agrega que los hechos señalados en la carta de despido constituyen un incumplimiento grave las obligaciones del contrato, así como una falta de probidad manifiesta. Afirma, que tomo conocimiento de las grabaciones debido a la acción por vulneración de derechos fundamentales que interpuso el Sr. Faúndez, ante el 2° Juzgado de letras del Trabajo de Santiago, en la cual incorporó al sistema de tramitación electrónico del Poder Judicial la prueba con que se valdría para acreditar sus afirmaciones. Dentro de dicha prueba, se ofrecían dos registros de audio y uno de video, a los que se podía acceder



mediante enlace - publicado en la minuta - a una plataforma de almacenamiento digital que estaban a pública disposición, pues no requerían una contraseña de acceso. Agrega que se examinó la prueba de la contraria, incluidos los archivos de audio referidos, y de esa forma se enteró del contenido de las conversaciones entre Faúndez y Helio Farías, denunciante de autos, que en resumidas cuentas, dan cuenta que Farías le avisa a Faúndez que será despedido, le recomienda que tire una licencia puntualizando se consiga una psiquiátrica por estrés laboral, reiterándole a Faúndez que de esa forma le podría sacar provecho a la situación y le sugiere armar un correo clandestino con fotos para hacerse cagar a dos personas, quienes sindica como los que habrían pedido el despido de Faúndez, le señala que se habría negado a enviar un mail pidiendo su salida y le indica a Faúndez que le habría copiado los correos más cototos, y le indica a quienes dirigir una denuncia (gerente general de Pelambres, el gerente de Corporativo, y una tercera persona, que no queda claro quién es), insistiendo en que tiene que ser un correo donde no aparezca Faúndez, y que para eso tiene que hacer un correo mula. Agrega que confirmado el hecho de que era efectivamente el denunciante y el Sr. Faúndez quienes participaban de la conversación, se tomó la determinación de poner término al contrato del primero, por haber incurrido en conductas poco probas, y además por incumplir con sus obligaciones contractuales. En cuanto que el denunciante habría sido despedido con vulneración de derechos fundamentales, ya que su representada se habría basado en una conversación obtenida por medios ilegales, es falso, ya que solo se enteró de ella casual y accidentalmente, por medios completamente lícitos, como lo es el examen a la prueba de la contraparte en el contexto de un juicio. Finaliza explicando que se configuran las causales de despido en cuanto los hechos señalados son graves, pues denotan que un trabajador con cargo de jefatura relevante dentro de una faena transmite información confidencial a otros trabajadores de la empresa, y los insta a realizar actos ilegales y fraudulentos para impedir la terminación de una relación laboral, los que son de por sí actos poco probos y un incumplimiento contractual, y además destruyen la confianza y buena fe que debe regir en la relación entre un trabajador y su empleador.

Tercero: Que, como cuestión previa, cabe advertir que el recurso adolece de un grave defecto de formalización en cuanto a las peticiones concretas que debe contener de acuerdo al artículo 480 inciso final del Código del Trabajo en relación con el artículo 477 inciso final del mismo código, ya que habiéndose deducido el recurso por una causal que afectaría de vicio tanto al procedimiento como a la sentencia por vulneración de garantías fundamentales, la recurrente debería haber solicitado tanto la invalidación del procedimiento como la invalidación de la sentencia; siendo que solamente solicitó “Invalidar el procedimiento hasta la celebración de la Audiencia Preparatoria, ordenándose continuar el conocimiento de la causa por juez no inhabilitado”, según consta en el acápite V “Peticiones Concretas” del libelo respectivo. En términos estrictos, este defecto, en el evento de acogerse el recurso, daría como resultado un absurdo

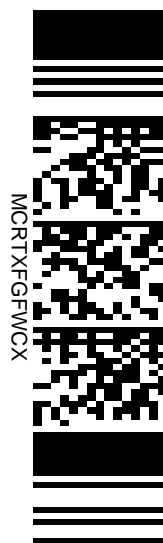


procesal, al mantener válida una sentencia que es producto de un procedimiento que ha sido anulado por estar sustancialmente viciado. Sin perjuicio que este defecto de formalización constituye una razón suficiente para desestimar el presente arbitrio, esta I. Corte se pronunciará respecto del fondo del recurso considerando la naturaleza de la causal.

Cuarto: Que, considerando que la recurrente en el recurso afirma la existencia de vulneración de diversos derechos fundamentales, cuya transgresión imputa indistintamente tanto a la parte demandada como al sentenciador, procede dejar establecido que, al tenor de la causal de nulidad invocada, a esta I. Corte solo le compete determinar si en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se infringió sustancialmente la garantía constitucional del debido proceso establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, al incorporar al juicio y ponderar en la sentencia el juez ad quo la prueba consistente en dos grabaciones de conversaciones sostenidas por el demandante con una tercera persona que también tenía la calidad de trabajador respecto de la demandada, las cuales se afirma en el recurso deberían haber sido excluidas por tener la calidad de prueba ilícita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 453 N° 4 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, como cuestión principal, se debe considerar que la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de vulneración de los derechos y garantías constitucionales en su dimensión procesal vinculada al derecho al debido proceso, entendido éste como el derecho a un proceso previo legalmente tramitado, racional y justo; comprende un conjunto de garantías, como son la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción y el oportuno conocimiento de la misma por la parte contraria, el emplazamiento, la adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas en conformidad a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos respecto de las sentencia dictadas por tribunales inferiores, entre otras. Que siendo múltiples las formas en que la afectación de estas garantías pueden comportar una vulneración del derecho al debido proceso, resulta necesario precisar que a los efectos de la procedencia de la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, dicha afectación debe ser sustancial, es decir, debe tener una entidad suficiente para afectar el derecho en su esencia, lo cual, a la luz de la doctrina, se entiende que es aquella afectación que tenga como efecto o resultado producir la indefensión de la parte a la cual se le ha conculcado la garantía procesal. En este sentido, en la especie, y con miras a resolver acertadamente el recurso, resultará pertinente junto con analizar la posible licitud o ilicitud de la prueba incorporada al juicio y ponderada por el juez ad quo, analizar si dicha actuación procesal de la judicatura produjo la indefensión del recurrente impidiéndole ejercer sus derechos para acceder a un proceso racional y justo.

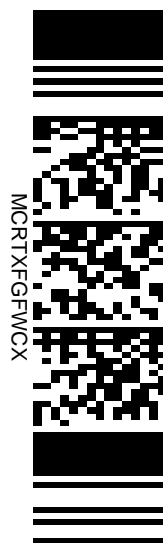
Sexto: Que, en lo referido al fundamento concreto de la causal de nulidad, la vulneración de la garantía del debido proceso que se invoca por la recurrente se refiere a la actuación del juez ad quo de



haber aceptado incorporar prueba al juicio que tendría la calidad de ilícita, habiéndola ponderado en el fallo. El artículo 453 N° 4 del Código del Trabajo se refiere a la prueba ilícita que amerita su exclusión en el juicio, señalando que son aquellas “pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales”.

En lo relacionado, cabe dejar sentado que la ilicitud de las grabaciones que constituyen la prueba controvertida en cuanto a su legalidad no ha sido declarada judicialmente por órgano que ejerza jurisdicción, no siendo por tanto una condición jurídica que el juez de la instancia estuviere obligado a reconocer en el juicio que ante él se ventiló, siendo válido en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales ponderar si la prueba tenía el carácter ilícito que le atribuye la parte demandante. En este mismo sentido, debe considerarse que en el juicio la parte demandante se limita a afirmar que las grabaciones fueron obtenidas con vulneración de sus derechos fundamentales al no ser consentidas y afectar su derecho a la vida privada e inviolabilidad de sus comunicaciones, mas no rindió prueba alguna sobre el punto, pudiendo haber ejercido este derecho. Al respecto, cabe considerar lo establecido por la Corte Suprema, en su fallo de fecha 12 de abril del 2018, Rol N° 35.159-2017, que señala en lo referido a la exclusión de prueba ilícita en materia laboral por vulneración de la garantía constitucional del derecho a la vida privada, que el contenido de la comunicación grabada debe referirse al ámbito reservado o íntimo de la persona, precisando que *“no puede omitirse del análisis el contenido relevante de la garantía que se denuncia vulnerada, el derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada, de acuerdo a los conceptos esbozados en el motivo quinto de este fallo. Contrastadas tales nociones con las expresiones subrepticamente grabadas, resulta evidente que éstas últimas no dicen relación con la esfera privada de quién las emitió ni constituyen, en caso alguno, el develamiento de algo reservado a su ámbito más íntimo y, en consecuencia, aún de estimar como razonable la expectativa de privacidad alegada, no podría considerarse que la grabación ha implicado una afectación sustancial a las garantías individuales ya mencionadas, supuesto indispensable para que una alegación de exclusión probatoria por ilicitud pueda prosperar.”*

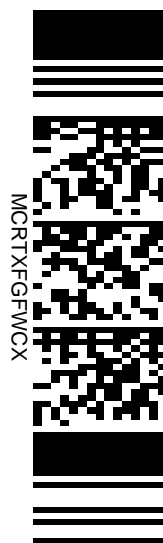
En cuanto al origen ilícito de los medios por los cuales se produjo la referida prueba, se puede asumir que esta ilicitud se concreta en una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico, específicamente refiere la recurrente que se configuraría el ilícito penal del artículo 161 A del Código Penal. Sin embargo, este tipo penal referido a las grabaciones de conversaciones es discutido en su alcance por la doctrina penal, ya que se estima por parte de la doctrina que el tipo exige que quien grabe o intercepte las conversaciones privadas sea un tercero ajeno a la conversación, lo cual no se da en la especie, puesto que la conversación telefónica del demandante habría sido grabada por el Sr. Faundez quien era el receptor de la referida comunicación.



De acuerdo con lo expuesto, la ilicitud de la grabación de la conversación del demandante con el Sr. Faundez no resulta concluyente, no siendo por tanto exigible al juez de la instancia que la hubiere excluido como medio de prueba en el juicio; decisión judicial en contrario que fue debidamente fundamentada en el fallo, no constituyendo una actuación ilegal que pueda entenderse afecta la garantía del debido proceso de la recurrente.

Séptimo: Que, a modo conclusivo, se debe considerar el sentido de la exclusión probatoria por ilicitud en la obtención de los medios de prueba aportados por las partes en juicio, institución que tiene su origen en el derecho penal, y cuyo objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales por parte de los agentes del Estado que ejercen el ius puniendi, desincentivando de este modo la producción de pruebas vulneradoras de los derechos de las personas, objetivo que trasladado a la relación laboral encuentra sentido a partir de la asimetría de poder en el vínculo entre el trabajador y el empleador. Con todo, no se debe olvidar que la exclusión probatoria es una excepción al derecho a probar, garantía fundamental del debido proceso, vinculado al derecho de defensa, puesto que resulta esencial para que los litigantes puedan desvirtuar las alegaciones de la parte contraria, o justificar las propias, y hacer efectivo el derecho a la tutela judicial. Desde este punto de vista, debe establecerse por la judicatura un adecuado equilibrio entre el derecho a probar como garantía constitucional del derecho a la defensa, y la exclusión de prueba por afectación de otros derechos constitucionales, ponderando adecuadamente la importancia y entidad de los derechos que se ven afectados en cada caso particular. En este sentido parece pertinente la ponderación que realiza el juez ad quo respecto a la entidad de los derechos que podrían haberse afectado con el modo de obtención de la prueba por una parte, referidas al contenido de la comunicación grabada que no se relaciona con la vida privada o ámbito íntimo del demandante sino con las funciones que le eran inherentes a su cargo laboral; como por otra, la circunstancias que dichas grabaciones no fueron subrepticamente obtenidas o interceptadas por el empleador, sino que las obtuvo de forma regular de la Oficina Judicial Virtual de acceso público.

En cuanto a la garantía constitucional que se afirma vulnerada por la causal de nulidad, y aplicando el razonamiento precedente al caso de marras, se debe considerar que la afectación del derecho al debido proceso que se alega por parte de la recurrente no se tradujo en un impedimento u obstáculo al ejercicio de algunas de las garantías procesales que constituyen el núcleo del derecho a defensa, fundándose más bien en la ilegalidad que atribuye a la actuación del juez al haber aceptado incorporar la prueba que considera ilícita; en tanto la exclusión de las pruebas que se pretendían por la demandante, relacionadas directamente con las evidencias respecto de las conductas en que se fundan las causales del despido, de falta de probidad en el ejercicio sus funciones e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, implicaban afectar sustancialmente el derecho a probar del demandado, dejándolo en una situación de indefensión frente a las pretensiones del demandante. De este modo, resulta



razonable la solución de equilibrio procesal que se acoge en el fallo recurrido en cuanto a la garantía del debido proceso de los litigantes, y en especial al derecho a la defensa que a ambas partes se les debe reconocer en juicio.

Octavo: De acuerdo con lo expuesto, esta I. Corte concluye que ni en el procedimiento ni en la sentencia se ha infringido el derecho al debido proceso de la recurrente consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, por lo cual la causal de impugnación del recurso de nulidad referida al artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, será desestimada.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en los 477, 478, 479, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad deducido por la abogada doña Neri Elizabeth Cuiza Urriola, en representación del demandante don Helio Farías Pasten, en contra de la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Jueza titular del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, doña Patricia Zavala Astudillo, en los autos RIT T-29-2022, la que en consecuencia no es nula, como tampoco lo es el procedimiento que la precede.

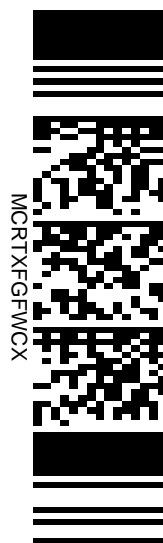
No se condena en costas del recurso a la recurrente por considerar que ha tenido motivos plausibles para interponerlo.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogada integrante Sra. Marcela Fernández Saldías.

Se deja constancia que la abogada integrante Sra. Marcela Fernández Saldías, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

N° Laboral - Cobranza-218-2023.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministra Ines Maria Letelier F. y Ministro Suplente Rodrigo Cortes G. Valparaiso, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

En Valparaiso, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

